

¿A quién escucha el presidente?



ANA MARÍA SALAZAR

Opine usted:
@amsalazar
www.
anamariasalazar.com

¿A quién escucha el presidente Peña Nieto? La respuesta a esta pregunta nos podría ayudar a descifrar las prioridades de políticas públicas y su estrategia de comunicación. Porque analizando los eventos en que a diario participa el presidente y sus declaraciones, parecería que no hay una estrategia o rumbo, ni es claro el mensaje ni lo que desea comunicar la Presidencia en un momento donde hay cuestionamientos de la capacidad del Estado para enfrentar varios frentes: el de seguridad, la economía y la falta de credibilidad que surgen por los cuestionamientos de posibles actos de corrupción.

Y es que en las últimas dos semanas el presidente Peña ha participado en eventos relacionados a la seguridad en Ciudad Juárez, facilitar créditos del Infonavit y su política de vivienda, política para reducir el embarazo precoz, cómo la reforma hacendaria fortalece infraestructura en el país.

Ayer, además de hablar sobre la reforma educativa, hizo mención del “elefante en la sala”, el tema que más afecta en este momento su capacidad de gobernar: el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El presidente comentó: “tenemos que darle atención. Tiene que haber justicia. Tiene que haber castigo para aquellos que fueron responsables de estos hechos lamentables, pero tenemos que asumirnos en el derrotero de seguir caminando para asegurar que México tenga un mejor porvenir”.

Para muchos, estos comentarios fueron desafortunados, ya que en lugar de insistir que el gobierno hará todo lo posible por asegurar que se resuelva y se castigue todos los criminales que participaron en esta masacre asegurando que no habrá impunidad; el presidente hizo un llamado de que el país tiene que poner atrás esta barbarie.

El mensaje y el momento en que hace esta declaración claramente indican que el presidente y sus asesores no tienen un entendimiento claro de lo que representa el caso de Ayotzinapa para México y el contexto internacional.

Algunos dirían que en este momento el presidente y su equipo buscan llenar el vacío informativo, con la esperanza de que con el tiempo el presidente tendrá más posibilidades de maniobras políticas después de las elecciones de medio término y la atención pública eventualmente se debilite ante el caso de Ayotzinapa y así debilitar a los grupos sociales que usan esta tragedia para promover sus intereses políticos. Además, el gobierno parecería estar esperanzado de que, a pesar de la caída del precio del petróleo, la economía empiece a reflejar un impacto en las arcas del gobierno y en los bolsillos de los mexicanos, gracias a la recuperación económica de Estados Unidos y el impacto de las reformas estructurales.

Pero es un error asumir que con el tiempo será más fácil gobernar. La teoría del poder subraya que sucede todo lo contrario. Mientras más se acerca el término de una administración, más se complica el ejercicio de gobernar ante las presiones de intereses que buscan reemplazar al gobernante.

Si asumimos que el país va en un rumbo incorrecto, entonces tenemos que preguntar: ¿quiénes son los que más capacidad tienen de cambiar el rumbo emprendido por un gobierno? Quisiéramos pensar que en una democracia son los electores los que ayudan a definir las políticas públicas, las prioridades del Ejecutivo y de los legisladores. Pero las elecciones en junio claramente nos indican que los ganadores se deberán más a la capacidad de movilizar legal o ilegalmente a los electores para que salgan a votar, no porque tengan la mejor propuesta

Continúa en siguiente hoja



Fecha 28.01.2015	Sección Opinión	Página 43
----------------------------	---------------------------	---------------------

electoral.

Pero regreso a mi pregunta original: ¿qué actores sociales tienen la capacidad de incidir en las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo? En la mayoría de las democracias es el sector privado quien mueve las decisiones del presidente y de los congresistas. En el caso de la “democracia” mexicana, parecería que nadie escucha ni le importa lo que piensa el sector empresarial. Algunos de ustedes dirán que esto es algo bueno, porque el dinero no debería de definir las políticas públicas de un Estado.

Pero sí sorprendió la poca reacción

de la Presidencia y de la clase política en general a un despliegado del 20 de enero, donde el sector empresarial y sus organizaciones, entre las que destacan **Concamín**, Coparmex, la Asociación de Bancos de México, Canacintra y el CCE, exigen un “Ya Basta” a las agresiones en contra del sector y condenando la impunidad.

Pero a pesar de las amenazas del impacto en el crecimiento y producción en el país, el gobierno simple y llanamente no respondió al despliegado ni a los reclamos. Y si la Presidencia no escucha a los empresarios, entonces ¿a quién escucha?

A los violentos.